

CARTA ABIERTA

- **40 Mil Millones, la destrucción del Hospital J. P. Garrahan y la responsabilidad de sus autores**

Como es de público conocimiento, en los últimos días se dio a conocer a partir de un pedido de acceso a la información pública realizado por diputados nacionales, el balance anual 2024 del Hospital J. P. Garrahan. Allí quedó expuesto que la institución disponía de 40 mil millones de pesos de fondos propios, fruto del esfuerzo de todos sus trabajadores, que fueron colocados en un fondo de inversión del Banco Nación y mantenidos ocultos al conocimiento del personal.

Todo esto sucedió mientras el hospital atravesaba un proceso de desfinanciamiento y de deterioro progresivo que ponía en riesgo su misión esencial: la atención de la salud de nuestros niños, niñas y adolescentes.

Según la Ley SAMIC de hospitales Nacionales, los fondos propios deben ser administrados con total autarquía por el hospital. Tradicionalmente se destinaban a tres fines: complemento salarial para los trabajadores, mejoras en equipamiento y atención, y una reserva limitada para emergencias. Esa reserva nunca debía superar entre 1,5 y 2 veces el gasto mensual en salarios y funcionamiento (aproximadamente en la actualidad, 12 mil millones de pesos). Todo excedente debía reinvertirse en salarios y mejoras hospitalarias.

La gravedad del hecho no radica solo en el ocultamiento: con esos recursos se habría podido evitar gran parte de la crisis actual. Más de 240 profesionales ya renunciaron, debilitando equipos esenciales que aborda patologías que solo pueden abordadas en nuestro hospital. También ocasionó la interrupción de proyectos científicos que significaban esperanza y calidad de vida.

Ese ocultamiento intencional no fue un error administrativo: fue un acto perverso. Porque sin necesidad de recursos extras, solo con los propios del hospital que se escondieron, se habría podido evitar no solo la pérdida de profesionales, sino, lo más doloroso, el sufrimiento de los niños y niñas y de sus familias. Familias que vieron retrasadas operaciones, controles y seguimientos de enfermedades complejas, obligadas a soportar la angustia de la espera como consecuencia directa de un reclamo ignorado por el Ministerio de Salud

Ocultar esos fondos fue un acto de extrema gravedad del ministro de Salud, Dr. Mario Lugones, avalado por el Poder Ejecutivo Nacional. Durante más de 18 meses, los trabajadores sostuvimos con esfuerzo y angustia un hospital que se desarma, mientras existían recursos suficientes para impedirlo.

El Garrahan no es una entidad financiera: es un hospital. Sus recursos deben reinvertirse en mejores condiciones de trabajo, en avances científicos y en salvar vidas. Este escándalo exige una respuesta inmediata del ministro Mario Lugones, a quien hacemos responsable del

desfinanciamiento intencional del Hospital J. P. Garrahan y del riesgo que hoy pesa sobre la salud de nuestros niños y niñas.

- **La importancia del Garrahan y el reclamo ignorado**

El Garrahan es un referente nacional e internacional en salud infantil. Cada año atiende más de 600.000 consultas, 25.000 internaciones, 10.000 cirugías, 110 trasplantes (50% pediátricos del país), y el 40% de las patologías oncológicas infantiles. Además, produce evidencia y protocolos que mejoran el sistema de salud en todo el país.

Sin embargo, en 2024 los salarios perdieron más del 60% de su poder adquisitivo. Mientras el sector privado aplicó recomposiciones, aquí los aumentos fueron mínimos. Esto provocó la renuncia de profesionales altamente capacitados, debilitando equipos que llevaron décadas de formación.

Pese a advertencias y reclamos documentados al entonces ministro de Salud, Dr. Mario Russo, la única respuesta fue: **“No hay plata”**.

- **Renuncias y pérdida de autarquía**

La crisis se profundizó con la salida de profesionales históricos y la renuncia del propio director administrativo, que reconoció que en pocos meses se fue más personal que en los últimos diez años.

El desplazamiento del Consejo de Administración y su reemplazo por un órgano intervenido desde el ministerio, bajo la conducción del Dr. Mario Lugones, violó la autarquía garantizada por la Ley SAMIC y desató aún más conflictos: paros, movilizaciones y renuncias masivas.

- **Paros y movilizaciones**

Los residentes, pieza fundamental en la atención y el funcionamiento del hospital, iniciaron paros frente a salarios indignos y jornadas laborales extenuantes. La falta de respuestas por parte del Ministerio, sumada al agotamiento del personal de planta, ya de por sí insuficiente durante los horarios de guardia, obligó al cierre de una sala de internación, a limitar la atención a urgencias y a suspender cirugías programadas. Finalmente, el gobierno los forzó a retomar sus tareas bajo amenaza de despido, imponiéndoles un bono no remunerativo financiado con los propios recursos del hospital, lo que profundizó aún más el desfinanciamiento.

- **Intervención y campaña de desprestigio**

El gobierno lanzó una ofensiva contra el hospital: desplazó al jefe de prensa y designó a María Candelaria Perrelli en su lugar, quien difundió mensajes agresivos. Paralelamente, desde el ministerio se publicaron cifras falsas sobre el funcionamiento del Garrahan. La precarización del sistema de residencias y la designación de Mariano Pirozzo como Director Médico Ejecutivo, sin experiencia en pediatría, aceleraron las renuncias, que ya superaban las 200.

- **La Ley de Emergencia Pediátrica**

Ante la falta de respuestas, los trabajadores impulsamos la Ley de Emergencia Pediátrica, que buscaba frenar las renuncias, mejorar los salarios y proteger el sistema de formación. Fue aprobada con amplia mayoría en ambas Cámaras, pero vetada por el presidente Javier Milei en un acto de irresponsabilidad y desprecio hacia la infancia.

El 17 de septiembre de 2025, la Cámara de Diputados rechazó ese veto por 181 votos. El próximo 2 de octubre, el Senado tendrá en sus manos la posibilidad histórica de sancionar definitivamente esta Ley vital.

- **Conclusión**

Hoy el Garrahan, orgullo de la salud pública argentina, está siendo llevado deliberadamente al cierre. No se trata solo de salarios ni de gestión: hablamos de vidas de niños y niñas que dependen de una atención segura y de calidad.

Cada área cerrada, cada turno perdido, cada profesional que renuncia deja una herida abierta en las familias que esperan una respuesta. Se condenó al dolor evitable, se negó la esperanza y se eligió el abandono.

Exigimos que se devuelva la autarquía al hospital, que se rindan cuentas por el ocultamiento de los fondos, y que el Senado de la Nación cumpla con su deber: aprobar la Ley de Emergencia Pediátrica.

TRABAJADORAS Y TRABAJADORES DEL HOSPITAL GARRAHAN